

Imprimir

Dos artículos recientes, uno de Darío Fajardo Montaña en el periódico de la Universidad Nacional en agosto de 2024 y otro de Alejandro Reyes de agosto 24 en el Espectador, resumen perfectamente el problema de la tierra, la situación de la producción agrícola y el desarrollo rural en medio del conflicto armado. Esos dos textos, inspiraron este escrito. Colombia es un caso en el cual el uso y propiedad de la tierra no ha superado una psicopatología de la violencia, el extractivismo y la ilegalidad asociada a los recursos naturales. Un estado centralista controlado por unas élites depredadoras de lo que tengan al frente: tierra, subsuelo, vida, baldíos, recursos públicos, recursos de los pobres y de los demás.

Las políticas para hacer del campo un inmenso territorio de prosperidad, vida y desarrollo, tuvieron mejores intenciones antes de 1991. La paz parcelada porque el acuerdo con las FARC debió ser el marco de los acuerdos con los demás alzados en armas, con obvias adiciones. La guerra con las FARC tuvo incidencia nacional, había frentes en todas las regiones, incluso cuando en la primera década del presente siglo su fuerza estuvo menguada por la ofensiva del Estado. La paz con las nueve organizaciones armadas que negocian con el gobierno del presidente Petro, hace difícil un acuerdo general, porque cada organización pertenece a territorios, culturas, problemas y economías distintas.

Colombia es feudal, terrateniente y depredadora de sus recursos naturales. La dirigencia no ha sido capaz porque no ha querido desarrollar una economía innovadora, productiva, exportadora, agro industrializada, minero industrializada, de industrias y servicios avanzados, y de autonomías regionales, porque la descentralización es producto de un Estado centralista descontrolado y desestructurado que navega en la corrupción y llena de elefantes blancos los territorios.

La descentralización es funcional a la corrupción política y pública aliada con contratistas privados, que neutralizan el desarrollo de las regiones, donde la depredación de lo público hizo metástasis junto a la informalidad, la ilegalidad y la injusticia social. Por eso no ha sido posible una reforma agraria. Por eso la ley de jurisdicción agraria comienza su trámite en el

Congreso de la República, con tantas mentiras de la oposición. Por eso Colombia no ha logrado producir y desarrollar tecnología para la producción y la transformación de la agricultura. Le permiten producir y exportar, pero no pensar ni innovar, porque el conocimiento, la investigación y la innovación está escriturada a otros. Cuando usted se para frente al mostrador de una tienda Juan Valdéz, con excepción del café, el azúcar, los mezcladores, vasos, bandejas de cartón y servilletas, los aparatos y equipos en los que preparan su café, son tecnología importada. Las mejores máquinas para procesar café, son de otros países, y cuando las compara con las fabricadas en Colombia, se observa que tenemos medio siglo o más de atraso. Eso significa que la educación, la ingeniería, el diseño y la capacitación que se imparte, es incompleta, por tanto, las políticas sectoriales son igualmente incompletas.

Colombia es una inmensa hacienda con enormes minas de carbón a cielo abierto y de socavón, y perforaciones para extraer petróleo y gas. Los países que importan alimentos y recursos fósiles van abonadas con sangre y cuerpos de miles de campesinos y trabajadores asesinados, y la labor de millones de colombianas y colombianos condenados a la penuria, porque ni la educación ni la salud ni la seguridad les llega, ni vías pavimentadas, y tampoco agua, luz e internet. Los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial) eran para cerrar brechas con otros territorios. Esos billones de pesos serían recursos para el avance y el bienestar de los municipios más pobres, pero se los robaron políticos, gobernantes locales, funcionarios del nivel nacional, y contratistas que son empresarios de la corrupción. La economía, la sociedad, la política y la justicia del mercado, son los culpables de torcer el desarrollo de Colombia.

Además, la Corte Constitucional se atraviesa a la modernización y transformación de la economía: tumba artículos de la reforma tributaria, tumba el derecho y las acciones del gobierno para la soberanía energética con las energías alternativas y el beneficio de los territorios donde se tienen las mayores potencialidades, tumba cualquier ley para desarrollar el campo, tumba todo lo que afecte intereses de la dirigencia y de las multinacionales. Es la Corte para los poderosos, es la Corte neoliberal, no es la Corte para Colombia y los colombianos. Por la Corte no hay estabilidad jurídica, ni reglas de juego claras y duraderas.

Es una Corte para la desposesión de la gente y la desposesión de la nación.

Agotadas paulatinamente las escasas reservas de petróleo y gas, también de carbón, porque en 15, 20 y 30 años se acabarán o no habrá quien las compre, pues todo lo perforaron y explotaron, y lo que queda es lo que queda porque no hay más. La dependencia de esos recursos, cuando ya el mundo, a pesar de la oposición de grandes capitales asociados a los recursos fósiles, debe emigrar a las energías alternativas, quieran o no. La eficiencia y los combustibles fósiles más limpios no salvarán el planeta. Como me dijo un funcionario de una multinacional de las energías renovables “estamos intentando frenar la velocidad de destrucción, porque aún no hemos empezado la recuperación”.

Reemplazar el parque automotor del mundo y de cada país, parece imposible. Tal vez lo logren los países más avanzados y con poca población. Los estados tendrían que asumir parte de ese desplazamiento porque de lo contrario millones de personas quedarían sin medio de movilización. A no ser que la humanidad reduzca drásticamente el transporte individual y la gran mayoría de la población se desplace en transporte público, alterando las ciudades y las costumbres de la sociedad capitalista. Por ejemplo, los parques o reservas naturales deberían atravesar las ciudades. No se trata solo de sembrar árboles, se trata de crear ciudades verdes inteligentes, justas y humanas. Estamos lejos de pensar el mundo de la sociedad sostenible en países emergentes no dinámicos como Colombia, que no es igual a las avanzadas sociedades sostenibles del norte de Europa.

El cambio tecnológico sostenible toma tiempo por más que se le imprima velocidad e inyecte grandes recursos a la investigación y el desarrollo de tecnología. El tiempo de la transición energética tiene su límite, y el límite no es cuando al ser humano le dé la gana. La ciencia toma tiempo y el avance tecnológico también, mientras el calentamiento global sigue su curso.

Es cierto que la mayor ventaja comparativa que hoy tiene Colombia, es la agricultura, como dice Alejandro Reyes, pero eso sucedía en gobiernos anteriores al neoliberalismo, cuando se hicieron esfuerzos para una mejor economía y sociedad rural, aunque sin estar cerca de un

mundo rural deseable y posible. A partir de Darío Fajardo, hoy, el 40% de los alimentos son importados, y por economías de escala, se limita la producción de insumos y de tecnología de producción. La extensión de la frontera agrícola no derivó en una mejor distribución de la tierra, por el contrario, se concentró aún más en pocos, que a la vez deforestaron y crearon grandes planicies para mostrar poder, pero no para crear valor y elevar la productividad. El GINI rural ya supera el 0.90, es decir, de seguir la tendencia y si la paz, la innovación y la inversión social no llegan, se logrará un Gini del 1.0. Colombia se convertiría en campeón mundial de la inequidad y de la guerra eterna sobre la tierra.

Por inexistente o insuficiente desarrollo científico y tecnológico, la productividad es inferior a países comparables. Razón por la cual las condiciones sociales son inhumanas. Entonces, el modelo agrícola se resume así: no se tiene soberanía alimentaria luego de la apertura en 1991, produce pocos insumos y casi nada de tecnología de siembra, cosecha y transformación agroindustrial. Todo lo importa. Entonces, Colombia está condenada a un porcentaje elevado de dependencia de alimentos y a la dependencia tecnológica en los demás sectores, que es la peor de todas, porque se asimila a una sociedad menos inteligente, menos innovadora y menos creativa que no puede desarrollar con libertad sus soberanías para establecer relaciones de colaboración e interdependencia con otras sociedades. Habría que revisar a fondo capacidades y actividades de los centros de investigación del agro, y diseñar un plan de largo plazo para identificar qué nuevos desarrollos productivos, científicos y tecnológicos se deben impulsar. Entonces, la gran ventaja comparativa de Colombia está subvalorada por la incapacidad de su dirigencia gremial, nacional, regional y política. Mientras no haya revolución educativa, científica y tecnológica, emprendedora y política, la soberanía alimentaria y la mayor ventaja comparativa de Colombia, será una verdad a medias.

Volviendo a las energías, el panorama es más esperanzador, aunque su camino es naciente. Colombia tiene al menos a Ecopetrol - porque perdió de manera irracional a Isagen y parece que la EPM transita a la privatización por chambonas administraciones de mala gente -, haciendo importantes inversiones en investigación y desarrollo para una mayor eficiencia energética, combustibles menos contaminantes y nuevas energías.

Sin embargo, el camino es largo y difícil, puesto que la soberanía alimentaria está en riesgo a pesar del gobierno progresista, y la soberanía energética está en discusión. Lo acabamos de ver con la falta de gasolina para avión y con el tercer apagón de la planta de Reficar. Entonces, Colombia tiene autonomías inseguras, pero no soberanías seguras.

Así las cosas, las ventajas comparativas de Colombia están en la agricultura, pero pronto también en las energías alternativas, más adelante en industrias de salud si este gobierno alcanza a impulsar el desarrollo de empresas innovadoras, así como en otras actividades de un sistema de movilidad sostenible, si se crean condiciones para el surgimiento de nuevas industrias y servicios de alta tecnología en el marco de la política nacional de reindustrialización, que debe ser la madre de las políticas económicas y de innovación. El turismo ecológico debe esperar a la paz, y que el progresismo se sienta más tiempo en los territorios olvidados, los más bellos y ricos de este país. Mientras tanto que la gente de otras partes venga a conocer Bogotá en ruinas.

Jaime Acosta Puertas

Foto tomada de: Indepaz